



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia:	Ejecutivo
Demandante:	JAVIER HURTADO GIL
Demandado:	VALEDUARD S.A.S.
Decisión:	Confirma auto
Radicado:	05001 31 03 001 2022 00396 01
Auto Nro:	025

**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR
SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

Medellín, catorce de marzo de dos mil veintitrés

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la providencia emitida el día 5 de diciembre de 2022, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN mediante la cual se DENEGÓ PARCIALMENTE EL MANDAMIENTO DE PAGO.

ANTECEDENTES:

Por escrito presentado el 26 de octubre de 2022, el apoderado judicial del señor JAVIER HURTADO GIL demandó a la sociedad VALEDUARD S.A.S., pretendiendo se ordenara el pago de la obligación contenida en varios títulos valores (pagarés) y en consecuencia se librara orden de apremio para el pago de las sumas allí pactadas, incluidos los honorarios profesionales y costas procesales que se originaran en caso de ser necesario el cobro judicial o extrajudicial de lo adeudado. Denegada la orden de apremio por éste último concepto, el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Mediante providencia del 18 de enero no repone dicha providencia en lo atinente a librar mandamiento de pago respecto de los honorarios profesionales y concede el recurso de apelación.

EL AUTO IMPUGNADO

Fundamenta el recurso la inconforme indicando que la suma por la cual se solicita se libre mandamiento de pago, si bien no aparece explícitamente en el pagaré, se puede determinar en el punto quinto que la sociedad demandada reconoce que en caso de recaudo judicial, como es la demanda, sería a su cargo; es decir, pagaría los correspondientes honorarios, pactándose expresamente en el pagaré; insistió que la demandada aceptó de manera implícita el pago de honorarios que se causen por la cantidad de USD 113.600.00 y la cual resulta del porcentaje acordado en el contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor Javier Hurtado Gil y Leonardo David García Hernández y la cual resulta como pago de la labor a ejecutarse y no es arbitraria con lo preceptuado en la ley; señaló que en este caso si es del resorte del proceso ejecutivo el pago por concepto de honorarios, resultando injusto y contrario a derecho su no reconocimiento. En consecuencia, solicitó se revoque la providencia impugnada y se libre mandamiento de pago por concepto de honorarios.

Desatado lo anterior, resulta pertinente afirmar que, en sede de segunda instancia, es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso, el cual respecto al trámite de la apelación de autos dispone que: *"Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisibile, así lo decidirá en auto; **en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso**"*, razón por la cual, al no advertirse la existencia de alguna causal de inadmisión del recurso, se procederá de plano a su resolución.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 422 del Código General del Proceso, por vía ejecutiva se pueden demandar las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él.

Ahora bien, de conformidad con la norma legal, sea cual fuere el origen de la obligación contenida en el documento público o privado, para que pueda demandarse ejecutivamente requiere de ciertas características: a) Que la obligación sea expresa, es decir, que se encuentre debidamente determinada, especificada, y patente en el título, y no sea el resultado de una presunción legal una interpretación de algún concepto normativo. b) Que la obligación sea clara, consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). c) Que la obligación sea exigible: significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que, habiendo estado sujeta a plazo o condición suspensiva, se haya vencido aquél o cumplido ésta. d) Que el documento provenga del deudor o de su causante: el título ejecutivo exige, como regla general, que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento, o heredero de quien lo firmó, o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor. e) Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: la prueba plena, llamada también completa o perfecta, es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere o, en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo a ese hecho.

Cuando se trata de procesos de ejecución se parte de la base de la certeza de la obligación que se pretende hacer efectiva; es así como la parte

demandante, tenedora legítima del documento en que conste la misma, queda exonerada de la carga probatoria que le imponen las normas en mención; le basta allegar el título para que sus pretensiones se vean establecidas. En cambio, quien es ejecutado debe proponer y probar los hechos fundamento de las excepciones tendientes a enervar la acción.

En todo caso, así el derecho sea de aparente certidumbre, el demandado, amparado en la garantía fundamental al debido proceso, en especial por la índole del derecho de contradicción que también emerge del principio procesal de bilateralidad de la audiencia, puede proponer las defensas que estime pertinentes para enervar la pretensión, pero ellas, cualquiera que se proponga, debe acreditada fehacientemente para poder derrumbar la eficacia cambiaria del título.

2. Para el caso que convoca la atención de la Sala se tiene que con la demanda se presentó pagaré en donde se pactó que el señor Valeduard S.A. pagaría a Javier Hurtado la suma de 508.000 USD y en la cláusula quinta del mismo se indicó *"En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal razón"*. Ésta última obligación es la que hoy pretende el apoderado de la parte demandante. Igualmente se aportó contrato de prestación de servicios con abogado suscrito entre el señor Javier Hurtado Gil con el Dr. Leonardo David García Hernández, pactándose en la cláusula séptima los honorarios así: *"El valor del presente contrato se pacta por la suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de las pretensiones contenidas en la demanda (...) El referido pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de las pretensiones deberá ser cancelado por EL CLIENTE cuando el Juzgado que conozca del proceso dicta sentencia, la fecha que observe la sentencia será la fecha será la fecha de vencimiento de la*

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

obligación que nace con el presente contrato". (Subrayas propias para resaltar la idea).

Acorde con lo anterior, de la cláusula quinta del título valor aportado, no se desprende una obligación clara, expresa y actualmente exigible como pasa a explicarse:

a. Como se indicó en párrafos anteriores para que la obligación sea clara deben estar los elementos debidamente determinados en el mismo. De lo pactado se advierte que el demandado allí se obligó a cancelar *las costas judiciales y/o los honorarios* sin que se indique el porcentaje o sobre qué valor se debían los mismos.

b. La sociedad demandada se obligó con el señor Javier Hurtado Gil y no con el Dr. García Hernández, por lo que no se puede hablar de una obligación expresa. Es de resaltar que, si bien se aporta contrato de prestación de servicios, el deudor allí es el señor Hurtado Gil y no Valeduard S.A.S.

c. De otro lado, se indicó que los honorarios se harían exigibles por el recaudo judicial o extrajudicial, empero no se estableció desde que momento se hacía exigible la obligación, pues lo determinado en el contrato de prestación de servicios, solo puede ser cobrado al señor Javier Hurtado Gil.

De manera que, dentro de los anexos aportados con la demanda no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 422 del C. General del P., en tanto que el profesional del derecho que asiste al actor carece de legitimación para ejecutar el aludido concepto, pues la obligación pactada allí debe ser cancelada a favor de Javier Hurtado y no del profesional del derecho; y (i) el contrato de prestación de servicios fue

Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

suscrito con el demandante y no con la sociedad demandada, por lo que, y en gracia de discusión, solo podría ejecutarse al señor Hurtado Gil, en proceso separado y luego de dictada la sentencia dentro de éste proceso, por lo que tampoco es actualmente exigible.

En ese sentido, acorde con el artículo 1602 del C. Civil *“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”*. Razón por la que se encuentra revestido de obligatoriedad, y permite a cualquiera de las partes involucradas en el mismo, acudir a la justicia cuando una de las partes incumple el contrato o lo cumple imperfectamente. Deviene de lo anterior, que en este caso la obligación se pactó entre Javier Hurtado Gil y no con el Dr. García Hernández, por lo que si ahora pretendía el pago de lo pactado debe estarse a la exigibilidad del mismo o a un incidente de regulación de perjuicio en caso de que se den los requisitos para ello.

Bajo esta línea argumentativa, las obligaciones que se pretenden ejecutar en este caso no son ni clara ni exigibles; además que la misma no puede ser ejecutada pues en el contrato que la contiene no es parte la sociedad Valeduard S.A.S.

Colofón de lo expuesto, el auto atacado debe ser CONFIRMADO en su integridad.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE:



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN el 5 de diciembre de 2022, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin costas.

NOTIFÍQUESE

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado